ENSAYO VALORACIÓN RACIONAL DE LA PRUEBA

EDWIN ANDRES PEREZ MONTAÑO

ESPECIALIZACION EN DERECHO PROCESAL

UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR

ENERO DE 2021

Resumen

El ensayo hace referencia a la valoración racional de la prueba, en la cual el operador judicial o el que esté investido para administrar justicia, debe hacer un juicio racional de los elementos probatorios que encuentre en el expediente, así como tener en cuenta el decreto y prácticas de pruebas para tener certeza de lo ocurrido, a lo cual debe tener en cuenta la carga dinámica de las pruebas, en el sentido de requerir a las partes o cualquier otra por fuera de proceso para que logre reconocer o negar el derecho solicitado por una (s) de las partes en el proceso. Para ello se analizan artículos de investigación, normas legales aplicables y jurisprudencia al respecto. Se enfatiza en que debe aplicarse el principio de carga dinámica de las pruebas para tener certeza de los hechos, y dar valoración racional a las mismas.

Palabras clave

Acceso a la verdad formal, prueba, reconocimiento de derechos, valoración racional.

Abstract

The essay refers to the rational evaluation of the evidence, in which the judicial operator or the one invested to administer justice, must make a rational judgment of the evidence found in the file, as well as take into account the decree and evidence practices to be certain of what happened, which must take into account the dynamic burden of evidence, in the sense of requiring the parties or any other outside the process to be able to recognize or deny the right requested by a (s) of the parties in the process. For this, research articles, applicable legal regulations and jurisprudence in this regard are analyzed. It is emphasized that the principle of dynamic loading of evidence must be applied to be certain of the facts, and give rational assessment to them.

Key words

Access to the formal truth, evidence, recognition of rights, rational assessment.

Introducción

La prueba es el medio de reconocimiento de hechos o circunstancias, constituye la manera en la cual se puede hacer representaciones de éstos en el tiempo, por lo tanto reflejan algo que sucedió o que puede llevarse a cabo, por lo cual a través de la descripción de las pruebas y las formas de la cual se hace valoración de las mismas por parte del operador judicial, se muestran las particularidades de la carga probatoria, así como la valoración en forma racional de las pruebas, para lo cual se utilizarán investigaciones analíticas de diversos autores nacionales e internacionales que han optado por estudiar esta situación.

En efecto, las pruebas son lo esencial para determinar la ocurrencia de los hechos, por ende deben ser de tal forma inmaculadas y sometidas al debate de las partes en virtud del derecho de contradicción, para lo cual es importante el juicio racional del operador judicial o investido para ello, a fin de que se genere certeza sobre la situación acaecida y el otorgamiento o no de derechos.

Se fundamenta esta investigación en doctrina constitucional y administrativa, en la jurisprudencia de las altas Cortes al respecto sobre la valoración probatoria en materia procesal en general, señalando también algunos aspectos de algunas ramas del derecho administrativo, civil y penal. Se utilizan fuentes terciarias de información documentada en libros, revistas especializadas.

Desarrollo

La administración de justicia inmiscuye a todo el aparato estatal, dando al juez un papel activo y por lo tanto está obligado a realizar actividades en la materialización de los derechos fundamentales, donde el principio dispositivo del fiscal está sometido al control del juez. Esta administración de justicia como fenómeno social tiene a través del tiempo connotaciones importantes, al entenderse el proceso como un conjunto de ritualidades necesarias para la adopción de una decisión, mediante la cual se resuelve un conflicto; pero hoy se entiende como mecanismo garante de la aplicación de los principios constitucionales en juego y otras veces en conflicto.

Por lo que, no podría estar sujeta a decisiones del legislador porque la valoración de este principio corresponde al juez en su función judicial aplicados a un caso particular y concreto en virtud de equidad amparado en el principio de la separación de poderes, no obstante esto solo es una parte al existir la imperiosa necesidad de herramientas o vehículos adjetivos de una solución razonable provista de celeridad.

En este sentido, los elementos esenciales de la administración de justicia se encuentran en la búsqueda de mecanismos para dar solución efectiva a los conflictos, con base a los fines esenciales del Estado Social y Democrático de Derecho, para lo cual los operadores judiciales y aquellos investidos para ello puedan con base a la racionalidad, efectuar valoraciones al respecto.

Esta valoración depende de la forma en la cual se logren probar los hechos, a lo cual debe tenerse en cuenta el principio probatorio de libre valoración de la prueba suponiendo la confianza en la capacidad de apreciación de la prueba y de la formación de la convicción de parte de jueces que la han presenciado directamente en audiencias públicas, de acuerdo con los principios de inmediación y concentración, donde las partes han tenido iguales oportunidades de producción y control de la prueba; criterio éste derivado de la Ley 1564 de 2012 (Código General del Proceso) en su artículo 167: la carga de la prueba incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen.

Con base a esta norma corresponde a las partes probar el hecho que alegan para demostrar sus pretensiones y excepciones, o su defensa en general, pueden aportar las pruebas necesarias que permitan demostrar los hechos y efectos jurídicos contemplados en la norma, la cual es la fuente primaria de la carga de la prueba.

No obstante, según las particularidades del caso, el juez podrá, de oficio o a petición de parte, distribuir, la carga al decretar las pruebas, durante su práctica o en cualquier momento del proceso antes de fallar, exigiendo probar determinado hecho a la parte que se encuentre en una situación más favorable para aportar las evidencias o esclarecer los hechos controvertidos. La parte se considerará en mejor posición para probar en virtud de su cercanía con el material probatorio, por tener en su poder el objeto de prueba, por circunstancias técnicas especiales, por haber intervenido directamente en los hechos que dieron lugar al litigio, o por estado de indefensión o de

incapacidad en la cual se encuentre la contraparte, entre otras circunstancias similares; cuando el juez adopte esta decisión, que será susceptible de recurso, otorgará a la parte correspondiente el término necesario para aportar o solicitar la respectiva prueba, la cual se someterá a las reglas de contradicción previstas en este código. Los hechos notorios y las afirmaciones o negaciones indefinidas no requieren prueba.

De acuerdo, con Parra (2004) la carga de la prueba es una noción procesal que consiste en una regla de juicio, que le indica a las partes la autorresponsabilidad que tienen para que los hechos que sirven de sustento a las normas jurídicas cuya aplicación reclaman aparezcan demostrados y que, además, le indica al juez cómo debe fallar cuando no aparezcan probados tales hechos.

Conmina el autor a ser responsables de la parte que alega un hecho y quiere solicitar una pretensión o demostrar su inocencia en un caso de responsabilidad de cualquier índole, con base a la dicotomía entre la condición y el criterio en el cual se fundamenta dicha condición, propendiendo también para el juzgador la obligación de adoptar decisiones conforme a las distintas formas de prueba existentes en el ordenamiento jurídico.

De igual manera, Rosenberg (2002) señala que las reglas sobre la carga de la prueba (...) ayudan al juez a formarse un juicio, afirmativo o negativo sobre la pretensión que se hace valer, no obstante la incertidumbre con respecto a las circunstancias de hecho, porque le indican el modo de llegar a una decisión en

semejante caso. La esencia y el valor de las normas sobre la carga de la prueba consisten en esta instrucción dada al juez acerca del contenido de la sentencia que debe pronunciar, en un caso en que no puede comprobarse la verdad de una afirmación de hecho importante. La decisión debe dictarse en contra de la parte sobre la que recae la carga de la prueba con respecto a la afirmación de hecho no aclarada.

Esto basado en el principio de carga dinámica de las pruebas por lo que cada parte que tenga la posibilidad de descubrirla, la aporta para el proceso y el esclarecimiento de la verdad, justicia y se logre reparación del daño acaecido por la ocurrencia del tipo penal que se trate. Esta carga dinámica consiste en “una regla que permite al juez en el caso concreto determinar cuál de las partes debe correr con las consecuencias de la falta de prueba de determinado hecho, en virtud a que a ésta le resulta más fácil suministrarla” (Bermúdez, 1995, p. 16). En este sentido, la adecuada preparación del caso por las partes y la consecuente explicación de pertinencia en las condiciones de claridad y puntualidad a que están obligadas, resulta determinante para muchas otras decisiones a lo largo de la actuación.

En efecto, el rol del Juez consiste en controlar, evitar el desbordamiento del poder controlado y garantizar los principios básicos que en una democracia occidental se suponen implícitos o se hallan expresos en su Carta Política. De su autonomía e independencia; de su deber de imparcialidad como servidor público; y, del desarrollo de su labor con sujeción estricta a las reglas del debido proceso.

Por lo tanto, los jueces tienen, entonces, el compromiso ineludible de orientar el proceso hacia el equilibrio, no siempre fácil, entre dos propósitos estatales de máxima importancia como son la realización de la justicia y la garantía de los derechos fundamentales de los asociados. Por esta razón, esto significa, ni más ni menos, adquirir plena conciencia de que la trascendencia de los intereses en juego dentro de un proceso exige la comprensión de sus instituciones, por encima de su aplicación mecánica. El dar aplicación a las normas procesales, implica que el funcionario judicial debe estar en capacidad de advertir que cada una de ellas desarrolla valores y principios de raigambre constitucional. Y si bien no es forzoso ni oportuno que en cada ocasión se realicen extensas explicaciones sobre el trasfondo de cada precepto, sí se debe actuar de manera coherente con el contexto normativo.

De igual manera, el concepto de verdad que se acoge es un concepto formal, en materia probatoria al Juez le corresponde, en primer lugar, desde la perspectiva del debido proceso, exigir el cumplimiento riguroso de las reglas que atañen al descubrimiento de las pruebas y la exclusión de pruebas ilícitas y, en segundo lugar, desde la perspectiva del derecho de defensa, garantizar al imputado adecuadas oportunidades de contradicción.

Por ello, el juez debe valorar los mismos a efectos de determinar con otras pruebas su veracidad, conforme a las reglas de la sana crítica, en garantía además de las reglas constitucionales del derecho de defensa y contradicción, “en el cual el juzgador debe establecer por sí mismo el valor de las pruebas con base en las reglas de la lógica, la

ciencia y la experiencia” (Corte Constitucional, 2005, Sentencia C-202), para luego sustanciar el sumario del proceso con criterios de justicia formal, esto es basando su decisión con base a lo que reposa en el expediente, fuera de cualquier consideración subjetiva, que luego puede ser objeto de recurso por una de las partes afectadas con su decisión al no valorar efectivamente las pruebas y no buscar la manera de corroborar lo manifestado por una de las partes o los testimonios de otras personas. “En efecto, valorar la prueba es determinar el grado de probabilidad que tienen las hipótesis fácticas de acuerdo a la información que arroja la prueba disponible. Valorar la prueba es definir o evaluar el grado de apoyo que una afirmación fáctica tiene de acuerdo a las pruebas practicadas en el juicio” (Ferrer, 2007, p. 58).

En este sentido, el juez en el estudio debe éste valorar las pruebas aportadas, solicitar a la parte que pueda aportar mejores elementos de juicio, utilizar la prueba indiciaria. Como lo señaló Couture (1958) las reglas de la sana crítica son, ante todo, las reglas del correcto entendimiento humano. En ellas interfieren las reglas de la lógica, con las reglas de la experiencia del juez. Unas y otras contribuyen de igual manera a que el magistrado pueda analizar la prueba (ya sea de testigos, de peritos, de inspección judicial, de confesión en los casos en que no es lisa y llana) con arreglo a la sana razón y a un conocimiento experimental de las cosas. “En este sentido, la lógica se ocupa exclusivamente del aspecto formal del razonamiento. La observancia de las reglas de la lógica no es condición suficiente más sí necesaria para la existencia de una ciencia” (Corte Constitucional, 1993, Sentencia C-504).

Es así como los jueces tienen, entonces, el compromiso ineludible de orientar el proceso hacia el equilibrio, no siempre fácil, entre dos propósitos estatales de máxima importancia como son la realización de la justicia y la garantía de los derechos fundamentales de los asociados. Implica que debe adquirir plena conciencia de que la trascendencia de los intereses en juego dentro de un proceso penal exige la comprensión de sus instituciones, por encima de su aplicación mecánica.

Además de aplicar las normas, el funcionario judicial debe estar en capacidad de advertir que cada una de ellas desarrolla valores y principios de raigambre constitucional. Y si bien no es forzoso ni oportuno que en cada ocasión se realicen extensas explicaciones sobre el trasfondo de cada precepto, sí se debe actuar de manera coherente con el contexto normativo. De análoga manera, en el desarrollo de un proceso, el servidor judicial está preparado para resolver de manera racional y lógica, los inconvenientes y dificultades que se le presenten cuando de buscar el ya mencionado equilibrio entre justicia y derechos fundamentales se trata.

En criterio de la (Corte Suprema de Justicia, 2017, Sentencia SC-91932017) la valoración individual de la prueba es un proceso hermenéutico, que consiste en interpretar la información suministrada a la luz del contexto dado por las reglas de la experiencia, las teorías e hipótesis científicas y los postulados de la técnica. Para ello, debe contrastar la consistencia del contenido de la prueba (adecuación o correspondencia) con la realidad, mediante el análisis de las circunstancias de tiempo, modo y lugar de los hechos.

El marco legal hace esta tarea fácil en algunas circunstancias y la experiencia es una ayuda constante; pero estos elementos por sí solos no son suficientes para que la decisión del juez sea buena. Distintos jueces, enfrentando la misma situación, muchas veces llegan a distintas decisiones, o si llegan a las mismas, lo hacen por diversas razones. Por tanto hay que abandonar el viejo concepto del juez “esclavo de la ley” a favor del concepto del juez razonador y humanista. El juez ni debe ni puede aplicar algún formulario a sus procesos de decisión para así llegar a una resolución certera. El tomar una buena y justa decisión requiere que el juez analice sus propios valores y percepción de sabiduría, para ver cómo estos pueden afectar sus decisiones.

En criterio de Bayón (2008) la valoración de la prueba siempre opera sobre un conjunto de información que es el resultado de la práctica de las pruebas propuestas por las partes y el juez, información que incidirá directamente sobre el grado (mayor o menor) de probabilidad que pueda tener una afirmación. Si este conjunto de información es contundente (ya sea porque los medios de prueba son más fiables, la información más directa en relación al hecho materia de prueba, etc.) la probabilidad de que el enunciado fáctico exista es mucho mayor.

De igual manera, una duda razonable es una duda basada en la razón y el sentido común –la clase de duda que haría a una persona razonable vacilar en actuar-. Una prueba que está más allá de una duda razonable debe, por lo tanto, ser una prueba de un carácter tan convincente que una persona razonable no vacilaría en confiar y actuar basada en ella en los más importantes de sus propios asuntos. El juez rechazará

argumentos para sostener fallos de responsabilidad penal que se basen en meras sospechas o conjeturas.

Por lo que en criterio de Hunter (2017) las reglas de valoración legal deben ser consideradas como normas de presunción simplemente legales y, en último término, como reglas de carga de la prueba. Esto significa, en simples palabras, que las inferencias probatorias que resultan de la aplicación de estas reglas pueden ser derrotadas por inferencias libremente construidas por el juez. En un esquema como éste la verdad puede tener cabida, aunque distribuyendo la carga de la prueba al litigante que pretenda disponer de un efecto probatorio diverso al presumido legalmente.

De igual forma, el principio probatorio de libre valoración de la prueba supone en la confianza como la capacidad de apreciación de la prueba y de la formación de la convicción de parte de jueces que la han presenciado directamente en audiencias públicas, de acuerdo con los principios de inmediación y concentración, donde las partes han tenido iguales oportunidades de producción y control de la prueba.

Ahora bien, esto no obsta para que el juez utilice la experiencia jurídica y los principios generales del derecho, la doctrina aplicable en forma humanista para que el fallo sea jurídicamente viable y humanamente posible, aportando un criterio claro que permita la asunción del derecho a la justicia, en especial cuando se trata de procesos

que conllevan como consecuencia la limitación a derechos fundamentales, como lo es la libertad personal; sumado aún más a la garantía de derechos constituci

onales a los menores de edad, quien cuenta con protección jurídica prevalente por ser personas en condición de debilidad manifiesta; por ende no es fácil al juez penal resolver o dirimir estos casos, pues claramente tendrá también una presión social y mediática que podrá afectarlo emocionalmente y hasta incluso en su seguridad personal, cuando deba tomar una respectiva decisión, lo cual exige de éste el mayor compromiso y cuidado.

Es deber del juez valorarlos para analizar si son veraces y que no logren objeto de interés por una de las partes; es así como la valoración “es legal porque la evaluación del acervo probatorio debe realizarse con respecto a las pautas y lineamientos que señala la norma positiva; y por último, es un proceso humano porque el juzgador, como ser perfectible, no puede dejar de lado sus concepciones personales, y por tanto, su experiencia, psicología y personalidad siempre están presentes en su decisión” (Rodríguez, 1990, p. 25).

Se deben tener en cuenta los aspectos de conducencia, pertinencia, utilidad, entre otros, donde el juez debe actuar activamente en la búsqueda de la verdad, con base a los principios de pertinencia, conducencia y necesidad de la prueba. La pertinencia hace referencia a la relevancia de la prueba para demostrar un (os) hecho (s); La conducencia se refiere a una cuestión de derecho. En general toda prueba que es pertinente y conducente es útil; hay casos en que esta premisa no se da, como cuando

se llevan pruebas encaminadas a demostrar hechos contrarios a una presunción de derecho, cuando se trata de demostrar el hecho presumido, cuando el hecho está plenamente demostrado en el proceso y cuando se trate de desvirtuar lo que ha sido objeto de juzgamiento y que ha hecho tránsito a cosa juzgada. La utilidad se refiere a su aporte concreto en punto del objeto de la investigación, en oposición a lo superfluo e intrascendente.

Por ello, los ámbitos de pertinencia de la prueba en materia penal están regulados en el artículo 375 de la Ley 906 de 2004 que permite la carga de la prueba en la parte que la aporta en explicar si la misma se relaciona directamente con los hechos, se refiere a la identidad del acusado, hace más probable o menos probable alguno de los hechos o circunstancias relevantes, etcétera. La valoración del testimonio entonces debe ser considerado como un “aspecto muy importante la capacidad de las personas encargadas de recibir la declaración de los niños, niñas y adolescentes víctimas de abuso sexual, ya que deben ser personas instruidas e idóneas para tal labor” (Quiñonez, Cuellar y López, 2015, p. 10).

En efecto, todas las actuaciones enderezadas al respeto de los principios rectores y las Garantías Procesales deben estar enmarcadas dentro de los llamados Principios Moduladores de la Actividad Procesal que son la necesidad de adelantar los procedimientos, es decir, la obligación ineludible e insoslayable de proceder de determinada manera cuando no hay otra forma de hacerlo, pero morigerada por la ponderación, es decir, el buen juicio, tranquilidad de ánimo, la ausencia de afanes para

ordenar procedimientos y tomar decisiones, además de la legalidad, es decir, obrar conforme las reglas que tenemos previamente establecidas, haciendo honra a la corrección en el comportamiento, todo lo cual permitirá no cometer atropellos o excesos constitutivos de abuso de autoridad o abuso del derecho que es precisamente todo lo contrario al buen ejercicio de la función pública pero especialmente de la Justicia.

Ahora bien, hay providencias que señalan que debe permitirse la carga dinámica de las pruebas y no enfatizar en la falla del servicio, es así como el (Consejo de Estado, 2010, Sentencia de 18 de febrero, expediente N° 17866) señala que en aras de que la Sala haga un alto en el camino para, en lugar de construir una jurisprudencia de caso, que se presta a contradicciones, adopte un sistema probatorio de principio en materia médico - hospitalaria que sin desconocer o subvertir los fundamentos estructurales de la responsabilidad.

En efecto, ello le facilitará al juez decidir más adelante, en el juicio oral, al que le “que compete la carga de la prueba, enfrentada a la defensa en un juicio contradictorio, oral y público y resuelta por el juez según su libre convicción” (Vanegas, 2004, p. 99). A este le corresponde emitir el veredicto, declarando la culpabilidad o inocencia de los acusados, para lo cual siempre deberá apoyarse en elementos de convicción suficientes en la toma de su decisión, la cual según lo prevé la ley se toma en base a la mayoría cualificada en caso de culpabilidad, y de mayoría simple si el veredicto es de inocencia.

Por ello se requiere un Juez imparcial que controle el Debido Proceso señalado en el artículo 29 de la Constitución, que respete la ley y la haga respetar bajo la mácula de la pureza de la Justicia, de la medida exacta de la balanza, para que se palpe que evidentemente se protegen los derechos constitucionales y se aplica verdadera Justicia. Según el artículo 230 de la Constitución Política de Colombia los jueces, en sus providencias, sólo están sometidos al imperio de la ley. Por lo que el juez aplica el derecho establecido a cierto caso concreto, con el fin de tutelar la conservación del orden jurídico y el mantenimiento de las condiciones básicas de la vida en sociedad, fundamentando, con base en su facultad jurisdiccional, las razones de hecho y de derecho que dan sentido y aplicabilidad a su fallo. En efecto, en situaciones donde se esté ante el derecho a la libertad, constituye un derecho fundamental protegido en el ordenamiento jurídico colombiano, el cual solo puede ser limitado bajo determinados parámetros constitucionales y legalmente establecidos, considerando también a las víctimas visibles e invisible socialmente.

Es así como la valoración integral de las pruebas, requiere la utilización de todos los medios disponibles para tener claridad de los hechos, que permitan precisamente la controversia de las mismas, apoyados de criterios técnicos, tecnológicos disponibles y necesarios son vitales para reconocer derechos e imponer limitaciones a los mismos, sin dejarse llevar por la información mediática y sesgada, a lo cual el juez debe tener la suficiente preparación mental para evitar ser afectado por una decisión parcializada.

En criterio de Hincapie y Peinado (2009) desde la concepción ideológica de la importancia humana y social de la prueba como búsqueda de la verdad, es donde ella adquiere una importancia trascendental dentro del proceso judicial, por ser la actividad que le brindará la certeza necesaria al operador jurídico, de cómo sucedieron realmente los hechos, para que luego pueda subsumirlos en la norma general que regula el hecho concreto, y así alcanzar el ideal supremo de impartir justicia en sus Decisiones.

Por ello, la motivación de la sentencia debe referirse entonces a las bases probatorias que fundamentan la decisión de fondo. Pero dicho examen probatorio no debe ser ajeno, ni al análisis de las proposiciones fácticas de las partes, ni mucho menos, al elemento jurídico inmerso en toda decisión judicial. Esta decisión debe ser ajustada a derecho y eso implica valorar integralmente las pruebas aportadas, recopiladas y las que sean necesarias para la toma de decisiones.

Conclusiones

De lo realizado se puede concluir que la valoración de las pruebas requiere el juicio imparcial de un tercero al cual le someten la facultad de administrar justicia, donde es preciso señalar que tal discusión se escapa de las pretensiones infundadas y hasta la trasciende de esta, a perspectivas metajurídicas de la prueba, en las cuales no es factible ubicar la razón jurídica de la prueba.

Se esgrima de este ensayo, que la prueba de los hechos en cualquier escenario de litigio jurídico hace referencia a hechos acaecidos en tiempos pasados. En este sentido, se debe demostrar la importancia que representan los hechos para el derecho y la necesidad de reconstruirlos a través de los medios de pruebas. Esto significa de igual forma, que no todos los hechos son grises para los abogados, pues el papel de las pruebas en el derecho es dar salidas a las incertidumbres fácticas, de ahí, que las pruebas, tienen una carga epistemológica trascendental para reconstruir los hechos históricos.

Debe tenerse en cuenta el concepto de carga de la prueba como una noción procesal, que contiene la regla de juicio por medio de la cual se le indica al juez cómo debe fallar, cuando no encuentra en el proceso pruebas que le den certeza sobre los hechos que deben fundamentar su decisión, e indirectamente establecer a cuál de las partes le interesa la prueba de tales hechos, para evitarse las consecuencias desfavorables a ella o favorables a la otra parte.

Referencias bibliográficas

Bayón, J (2008) "Epistemología, moral y prueba de los hechos: hacia un enfoque no benthamiano", pp. 1-21. Disponible en <http://www.udg.edu/areas/Filosofia/Default.aspx>

Bermúdez, M (1995) El futuro de la carga de la prueba en materia de responsabilidad, en: *Revista Temas Jurídicos*. N° 11

Colombia. Consejo de Estado (2010) Sentencia de 18 de febrero, expediente N° 17866. [C.P. Dra. Ruth Stella Correa Palacio]

Colombia. Corte Constitucional (08 de Marzo de 2005) Sentencia C-202 [MP Dr. Jaime Araujo Rentería].

Colombia. Corte Constitucional (04 de Noviembre de 1993) Sentencia C-504/93 [MP Dres. Eduardo Cifuentes Muñoz y Carlos Gaviria Díaz].

Colombia. Corte Suprema de Justicia (29 de marzo de 2017) Sentencia SC-91932017

Couture, E. (1958) *Fundamentos del Derecho Procesal Civil*. Buenos Aires: Editorial Depalma. Recuperado de: <http://www.upg.mx/wpcontent/uploads/2015/10/LIBRO-42-Fundamentos-de-Derecho-Procesal-Civil.pdf>

Ferrer, J (2007) La valoración racional de la prueba (Madrid, Marcial Pons)

Hincapie, E y Peinado, J (2009) El sistema de valoración de la prueba denominado la sana crítica y su relación con estándar más allá de la duda razonable aplicado al proceso penal colombiano. Tesis de grado, Universidad Eafit de Colombia. Disponible en https://repository.eafit.edu.co/bitstream/handle/10784/436/Elizabeth_HincapieHincapie_2009.pdf;jsessionid=0E593873C43E1EA6A17F4A50560CF9F2?sequence=1

Hunter, I (2017) Reglas de prueba legal y libre valoración de la prueba: ¿Cómo conviven en el Proyecto de Código Procesal Civil? *Revista Ius et Praxis vol.23 No.1*. Talca. Disponible en https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-00122017000100008

Quiñonez, F; Cuellar, M y López, S (2015) Validez judicial del testimonio del niño, niña o adolescente víctima del delito sexual. Universidad Libre Seccional Bogotá D.C. Recuperado de <https://repository.unilibre.edu.co/bitstream/handle/10901/9296/VALIDEZ%20JUDICIAL%20DEL%20TESTIMONIO%20DEL%20NI%C3%91O%20C%20NI%C3%91A%20O%20ADOLESCENTE%20V%C3%8DCTIMA%20DEL%20DELITO%20SEXUAL.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

Rodríguez, G (1990) Curso de Derecho Probatorio. Ediciones Librería del Profesional.
Bogotá

Vanegas, D (2004) *El Sistema Acusatorio Estructura de Proceso Penal*, 3° Edición,
Biblioteca Jurídica Diké, Medellín-Colombia